



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES EN MATERIA DE FORMACIÓN

En Cáceres, a 21 de mayo de 2025

REUNIDOS

De una parte, la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la Excm. Sra. D.^a María Isabel Perelló Doménech, nombrada según Acuerdo (n.º 1.2º) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 3 de septiembre de 2024, Real Decreto 888/2024, de 3 de septiembre, (BOE de 4 de septiembre de 2024) en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en representación del Consejo General del Poder Judicial según la previsión del artículo 598.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. Don Miguel Ángel Morales Sánchez, Presidente de la Excm. Diputación Provincial de Cáceres, en representación de esta institución, elegido mediante acuerdo plenario de fecha 1 de julio de 2023 en la sesión constitutiva de la Diputación Provincial de Cáceres, para el mandato 2023-2027 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999 de 21 de abril.

Reconociéndose ambas partes, Consejo General del Poder Judicial y Diputación Provincial de Cáceres, la capacidad legal necesaria para celebrar y firmar el presente convenio de colaboración , y

EXPONEN

PRIMERO.- Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con los artículos 105, 585 y 598 de la propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del Poder Judicial y del órgano de gobierno del mismo.

El Consejo General del Poder Judicial, entre sus funciones constitucionales de gobierno del Poder Judicial, ostenta la exclusiva competencia en materia de formación inicial y continuada de jueces y magistrados en virtud de lo dispuesto en el artículo 560.1.7ª de la LOPJ, para cuyo ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 433bis.4 de la LOPJ, puede colaborar con entidades y organismos.

SEGUNDO.- Que la Excm. Diputación Provincial de Cáceres actúa al amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que determina en su artículo 31.3 que el gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo, siendo su Presidente el que dirige y representa a la Diputación ex artículo 34.1.a) de la citada Ley, correspondiéndole en todo caso «Desempeñar la jefatura superior de todo el personal» de conformidad con el artículo 34.1.h) ; señalándose igualmente en el artículo 36.2.c) , e igualmente en el artículo 36.2.c) se señala como competencia propia de la Diputación de Cáceres «garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas».

TERCERO.- Como resultado del análisis y contraste de los fines atribuidos a las partes intervinientes, se evidencia que la realización de actividades de formación

dirigidas a los miembros de la carrera judicial y a los funcionarios y personal laboral de la Diputación de Cáceres y de los Ayuntamientos de la provincia de Cáceres en materias de derecho público y privado, conllevarán una mejora en la prestación del servicio público a los ciudadanos y en el cumplimiento de la legislación, normas y especificaciones aplicables en el ejercicio de las competencias y funciones en sus respectivos ámbitos de actuación.

CUARTO.- En atención a todo cuanto se acaba de exponer, ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficioso para ambas la colaboración en distintas materias de su competencia, acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

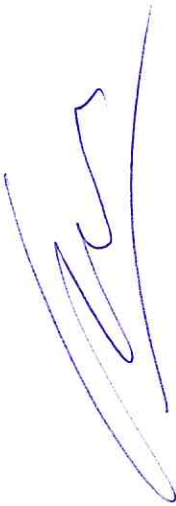
PRIMERA.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto fijar las líneas específicas de colaboración entre ambas instituciones, en diferentes áreas del Derecho Público y Privado de interés común, y en particular en el desarrollo de actividades formativas dirigidas a miembros de la carrera judicial y al personal funcionario y laboral de la Diputación de Cáceres, con la finalidad de promover el mutuo conocimiento de las respectivas realidades de cada institución y, por ende, a los Alcaldes y Alcaldesas y al personal de los Ayuntamientos de la provincia de Cáceres

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

A estos efectos, ambas partes convienen en realizar actividades conjuntas en cuantas materias de derecho público y privado resulten de interés común. A título enunciativo, formarán parte de las actividades que se han de desarrollar en el presente convenio, las relativas a la organización y realización conjunta de seminarios, jornadas y cursos, con asistencia tanto de miembros de la Carrera Judicial como del personal de la Diputación de Cáceres.


La Diputación de Cáceres se compromete a realizar entre los Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, la difusión necesaria del presente convenio de colaboración, a



fin de que tengan adecuado conocimiento de su celebración y de las acciones formativas que se emprendan en su ejecución, en distintos momentos y formatos que se irán definiendo a lo largo de la vida del presente acuerdo en anexos al mismo, en los que podrán participar la Diputación de Cáceres y sus Organismo Autónomos y las Entidades Locales de la provincia de Cáceres. Para ello, se emplearán los habituales medios de difusión externa e interna y aquellos otros que puedan entenderse precisos en cada momento.

TERCERA.- FINANCIACIÓN

El presente convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes.



Las actuaciones derivadas de este convenio que tengan alguna incidencia económica o presupuestaria para las partes, se articularán en acuerdos de ejecución de este convenio y estarán sujetos a los preceptivos informes de legalidad y a la previa fiscalización del gasto y de los compromisos económicos contraídos.

La Diputación de Cáceres se compromete a dotar las partidas presupuestarias precisas para sufragar los gastos que puedan generarse en las distintas acciones formativas que se puedan organizar a lo largo de la vigencia del presente convenio.

CUARTA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales.

Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes intervinientes en el orden que consta en el encabezamiento de este convenio comenzando por el CGPJ.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidenta/e y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada, levantándose de cada una de las sesiones la correspondiente acta.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente convenio y ejercerá las siguientes funciones:

- a) Elaborar periódicamente un memorándum, relativo a las cuestiones que hayan propiciado un mayor interés en el ámbito local y judicial, de forma que se prioricen las materias objeto del presente convenio, dando lugar al desarrollo de los foros, jornadas u otros actos formativos.
- b) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente convenio. En la medida en que estas actividades comporten obligaciones y compromisos económicos, se articularán a través del correspondiente acuerdo de ejecución de este convenio, cumplimentándose los trámites preceptivos correspondientes por cada parte firmante.
- c) Realizar el seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente convenio.
- d) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.
- e) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del convenio.
- f) Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la mencionada Ley. Para lo no previsto expresamente, el régimen, funciones, composición y funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª, artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para órganos colegiados de las administraciones públicas.

QUINTA.- VIGENCIA Y EFICACIA DEL CONVENIO

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento mediante su firma. Tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de su firma.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente, que se documentará en la correspondiente adenda, o la extinción del convenio.

SEXTA.- MODIFICACIÓN, RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente adenda modificativa que deberá ser suscrita por las mismas autoridades que el presente convenio.

De acuerdo con el art. 51 de la LRJSP:

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
 - a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.
 - b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
 - c) La denuncia del convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito.
 - d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.

Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

- e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio
- f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del convenio
- g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

La resolución del convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52.3 de la LRJSP.

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS

En relación con la seguridad y la protección de los datos de carácter personal que se recogen en el presente convenio, y los que se deriven de su ejecución serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente convenio.

Ambas partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:

- a) En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la consideración de "Corresponsables del Tratamiento", en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se respecta al tratamiento de datos personales a la libre circulación de estos datos (RGPD). En el caso del CGPJ el responsable del tratamiento a los efectos del RGPD es la Secretaría General. En el caso de la Diputación de Cáceres el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es D. Santiago Olivenza Sánchez, Área de Presidencia. Dirección: Plaza de Sta. María, s/n. 10003. Cáceres. Teléfono: 927 18 97 31; Email: solivenza@dip-caceres.es

- b) Dentro de este régimen de corresponsabilidad, el CGPJ es responsable del tratamiento de los datos personales correspondientes a la participación de los miembros de la carrera judicial en los ciclos, cursos, seminarios, coloquios o mesas redondas, realizadas en ejecución del presente convenio, así como de los tratamientos relativos a la gestión y tramitación de las actividades docentes, administrativas y económicas derivadas de los mismos. Los referidos datos personales serán incorporados a las actividades de tratamiento del CGPJ denominadas «formación continua y complementaria», y «profesores». La Diputación de Cáceres, por su parte, es responsable de los tratamientos correspondientes a la participación del personal funcionario y laboral de la Diputación de Cáceres y su organismos autónomos y a la participación del personal funcionario y laboral de los ayuntamientos de la provincia de Cáceres en las acciones formativas, así como los relativa a la gestión y tramitación de las actividades docentes, administrativas y económicas derivadas del desarrollo de ciclos, cursos, seminarios, coloquios o mesas redondas.

La determinación de la esfera de responsabilidad de las partes signatarias se comunicará a los titulares de los datos al informarles de los derechos contemplados en la letra f) de la presente cláusula.

- c) Los datos derivados de este convenio serán de carácter identificativo y financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto establecido en el convenio.
- d) En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afectan a los tratamientos derivados de este convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir incidentes similares.

- e) Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
- f) Las personas titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación, limitación de tratamiento y oposición en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento o, en el caso del CGPJ, a través del formulario web accesible en

[Ejercicio de derechos: formulario | CGPJ | Temas | Protección de Datos](#)

Y en el caso de la Diputación de Cáceres, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la política de privacidad accesible en: <https://www.dip-caceres.es/servicios/gestion-y-seguridad-de-la-informacion/>

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este convenio, sea cual sea a causa de dicha extinción. Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO

El convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no teniendo carácter contractual.



Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman por duplicado el presente convenio.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
SUPREMO Y DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL

EL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÁCERES

Fdo.: María Isabel Perelló Doménech

Fdo.: Miguel Ángel Morales Sánchez